



Comisión Seccional de  
Disciplina Judicial  
Tolima

Magistrado Ponente  
**DR. CARLOS FERNANDO CORTES REYES**

Disciplinables: En averiguación de responsables  
Cargo: Funcionarios y/o Empleados del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles  
Compulsa: Corte Constitucional  
Decisión: Terminación Previas  
Radicación: 73001250200220230085500

Ibagué, 13 de marzo de 2024

Aprobado según acta No. 009 / Sala Primera de Decisión

## 1. ASUNTO A TRATAR

Procede la Sala a decidir la viabilidad de dar aplicación al artículo con el artículo 224<sup>1</sup> y el artículo 90<sup>2</sup> de la Ley 1952 de 2019 en la diligencia previa adelantada, contra los Empleados del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles.

## 2. SITUACIÓN FÁCTICA

Tiene origen la actuación en la Compulsa de Copias interpuesta por la Honorable Corte Constitucional, en providencia del 30 de junio de 2022, proferida por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, en la que se dispuso:

*“[...] VIGÉSIMO TERCERO. ADVERTIR que la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió tardíamente 11.110 expedientes por parte de las autoridades judiciales relacionadas en los anexos 1 y 2. En consecuencia, REMITIR copia del presente auto al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con sus anexos, en los que se encuentran un análisis estadístico y la determinación de dichos expedientes, realizado por la Presidencia de esta Corporación sobre las remisiones tardías. Esto, con el fin de que adelanten todas las gestiones necesarias para identificar las causas que generaron la tardanza en el análisis de los expedientes por parte de la Sala de Selección y, de ser el caso, adopte las medidas necesarias para corregir esta circunstancia. [...]”.*<sup>3</sup>

Providencia en la que se incluyó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles por la remisión tardía de las siguientes acciones de tutela:

<sup>1</sup> **ARTICULO 224. Archivo definitivo.** En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el Artículo 90 y en el evento consagrado en el Artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión ha a tránsito a cosa juzgada.

<sup>2</sup> **ARTICULO 90. Terminación del proceso disciplinario.** En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarara y ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la que comunicada al quejoso.

<sup>3</sup> Documento 002COMPULADECOPIAS11202300855

- De la Personería Municipal de Roncesvalles en representación de Amilkar Galvis Romero contra Nueva EPS S.A. – IPS Viva Tolima Rad 73622408900120210004300.<sup>4</sup>
- De la Personería Municipal de Roncesvalles en representación de Maibe del Valle Pérez Barrera contra Hospital Santa Lucia de Roncesvalles- Gobernación del Tolima secretaria de salud Departamental-Migración Colombia-Ministerio de Salud Rad 73622408900120210006100.<sup>5</sup>
- De William Fernando Amaya Bravo contra la Alcaldía Municipal de Roncesvalles Rad: 73622408900120210000200.<sup>6</sup>
- De Mayi Yurena Molina Cuellar contra Unidad para la Atención y Representación de Víctimas-UARIV Rad 73622408900120210006300.<sup>7</sup>
- De María Leonor Morales Cuellar contra Banco Agrario de Colombia S.A. Rad 73622408900120210008400<sup>8</sup>
- De Jorge Iván Rivera Díaz contra la Alcaldía Municipal de Roncesvalles Rad 73622408900120210005100<sup>9</sup>

### 3. ACTUACIÓN PROCESAL

**3.1. INDAGACIÓN PRELIMINAR:** Recibidas las diligencias de la Oficina Judicial con reparto del 8 de septiembre de 2023<sup>10</sup>; ante el desconocimiento de los presuntos responsables de los hechos génesis de la compulsa, conforme lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019,<sup>11</sup> en auto del 12 de septiembre de 2023 se dispuso la apertura de indagación previa, en averiguación de responsables, contra funcionarios y/o Empleados del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles Tolima.<sup>12</sup>

**3.2.** El doctor Mauricio Mogollón Pérez en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Roncesvalles, informó que el empleado encargado de la remisión de las acciones constitucionales que ocupan la atención de la Sala fue el doctor JOSE ARQUIMEDES URREGO, Citador Grado 03 del despacho judicial.<sup>13</sup>

### 4. CONSIDERACIONES

#### 4.1. COMPETENCIA.

La Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima es competente para adelantar la primera instancia el presente asunto, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo

<sup>4</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 6

<sup>5</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 9

<sup>6</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 14

<sup>7</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 17

<sup>8</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 23

<sup>9</sup> Documento 003ANEXOCOMPULSA/RADICADO202300855/RAD.2023-00855 CFCR (SALA 6-2022) registro 25

<sup>10</sup> Documento 004ACTADEREPARTO11202300855

<sup>11</sup> **ARTÍCULO 208. Procedencia, objetivo y trámite de la indagación previa.** En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa.

La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación previa podrá extenderse a otros seis (6) meses.

Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos. Cuando a la actuación se allegue medio probatorio que permita identificar al presunto autor, inmediatamente se deberá emitir la decisión de apertura de investigación.

**PARÁGRAFO.** Si en desarrollo de la indagación previa no se logra identificar o individualizar al posible autor o se determine que no procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo. Esta decisión no hará tránsito a cosa juzgada material.

<sup>12</sup> Documento 006INDAGACIÓNPREVIA2023-00855

<sup>13</sup> Documento 010RTAJUZGADOPROMISCUODERONCEVALLES202300855

257 A de la Constitución Política; de otro lado, la Ley 1952 de 2019 en los artículos 2 estableció la titularidad de la potestad disciplinaria,<sup>14</sup> y 25 indicó quienes son destinatarios del Código General Disciplinario.<sup>15</sup>

Conforme lo anterior procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

#### **4.2. PRESUPUESTOS NORMATIVOS**

Conforme lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, los servidores públicos han de responder por la infracción de la ley, la omisión y la extralimitación en el ejercicio del cargo, categorías que el código disciplinario extiende al abuso de la función o el cargo; por tanto, el Derecho Disciplinario tiene como finalidad salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos<sup>16</sup>.

En este propósito, aparece en primer orden el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, que consagra los deberes que deben cumplir los funcionarios judiciales y, en segundo término, los artículos 4, 9, 10, 47 y 26 de la ley 1952 de 2019, que regulan la estructura jurídica de la falta disciplinaria.

#### **4.3. CASO CONCRETO.**

Se centra la investigación disciplinaria en la compulsa de copias dispuesta por la honorable Corte Constitucional, por la mora en la remisión de los expedientes de acciones de tutela de: la Personería Municipal de Roncesvalles en representación de Amilkar Galvis Romero contra Nueva EPS S.A. – IPS Viva Tolima Rad 73622408900120210004300; Personería Municipal de Roncesvalles en representación de Maibe del Valle Pérez Barrera contra Hospital Santa Lucia de Roncesvalles y otros Rad 73622408900120210006100; William Fernando Amaya Bravo contra la Alcaldía Municipal de Roncesvalles Rad: 73622408900120210000200; de Mayi Yurena Molina Cuellar contra Unidad para la Atención y Representación de Víctimas-UARIV Rad 73622408900120210006300; de María Leonor Morales Cuellar contra Banco Agrario de Colombia S.A. Rad 73622408900120210008400 y la de Jorge Iván Rivera Díaz contra la Alcaldía Municipal de Roncesvalles Rad 73622408900120210005100 para su eventual revisión.

**4.4. VALORACIÓN PROBATORIA:** en etapa previa se allegó al expediente digital las siguientes pruebas:

Con oficio fechado 18 de enero de 2024, el titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles, doctor Mauricio Mogollón Pérez remitió copia de los expedientes de cada una de las acciones constitucionales que fueran descargadas por secretaría y anexadas al expediente disciplinario digital,<sup>17</sup> informó el trámite dado a la acción de tutela tantas veces

<sup>14</sup> **ARTÍCULO 2. Titularidad de la potestad disciplinaria.** A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.

<sup>15</sup> **ARTÍCULO 25.** Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinarios los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.

Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, serán disciplinados conforme a este código.

<sup>16</sup> Corte Constitucional, Sentencia C 818/05. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>17</sup> Documento 010RTAJUZGADOPROMISCUODERONCEVALLES202300855

referidos, e indicó que el empleado encargado de la remisión de las acciones constitucionales para eventual revisión, era el citador señor JOSÉ ARQUÍMEDES URREGO OVALLE identificado con cédula de ciudadanía No. 14.319.937, de quien remitió copia de los actos administrativos de nombramiento y posesión, así como de las novedades administrativas registradas por el empleado en el periodo de la mora, esto es, de mayo de 2021 a marzo de 2022.<sup>18</sup>

#### 4. Novedades administrativas:

##### II. Permisos:

- Resolución 004 del 19 de marzo de 2021 -> concede permiso los días 24, 25 y 26 de marzo de 2021.
- Resolución 007 del 14 de mayo de 2021 -> concede permiso los días 18, 19 y 20 de mayo de 2021.
- Resolución 010 del 19 de julio de 2021 -> concede permiso los días 21, 22 y 23 de julio de 2021.
- Resolución 015 del 12 de noviembre de 2021 -> concede permiso los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2021.

Para un total de doce (12) días de permiso.

Explicó el trámite impreso a cada una de las acciones de tutela de las que se tiene:

#### I. Radicado: 73622408900120210004300

Accionante: Personería Municipal de Roncesvalles- Tolima en representación de Amilkar Galvis Romero

Accionado: Nueva EPS S.A. - IPS Viva Tolima.

Vinculado: Gobernación del Tolima – Secretaria de Salud Departamental

Fecha radicación: 7 de mayo de 2021

Fecha admisión: 7 de mayo de 2021

Fecha Notificación: 7 de mayo de 2021

Fecha sentencia: 18 de mayo de 2021

Fecha envió Corte Constitucional: 29 de marzo de 2022

#### II. Radicado: 73622408900120210006100

Accionante: Personería Municipal de Roncesvalles- Tolima en representación de Maibe del Valle Pérez Barrera

Accionado: Hospital Santa Lucía de Roncesvalles – Alcaldía Municipal de Roncesvalles - Gobernación del Tolima Secretaria de Salud Departamental – Migración Colombia – Ministerio de Salud.

Fecha radicación: 29 de junio de 2021

Fecha admisión: 29 de junio de 2021

Fecha Notificación: 30 de junio de 2021

Fecha sentencia: 14 julio de 2021

Fecha envió Corte Constitucional: 29 de marzo de 2022

---

<sup>18</sup> Documento 010RTAJUZGADOPROMISCUODERONCEVALLES202300855

**III. Radicado: 73622408900120210000200**

Accionante: William Fernando Amaya Bravo  
Accionado: Alcaldía Municipal de Roncesvalles  
Fecha radicación: 27 de enero de 2021  
Fecha admisión: 28 de enero de 2021  
Fecha Notificación: 28 de enero de 2021  
Fecha sentencia: 4 de febrero de 2021  
Fecha envió Corte Constitucional: 28 de marzo de 2022

**IV. Radicado: 73622408900120210006300**

Accionante: Mayi Yurena Molina Cuellas  
Accionado: Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas - UARIV  
Fecha radicación: 2 de julio de 2021  
Fecha admisión: 2 de julio de 2021  
Fecha Notificación: 2 de julio de 2021  
Fecha sentencia: 15 de julio de 2021  
Fecha envió Corte Constitucional: 29 de marzo de 2022

**V. Radicado: 73622408900120210008400**

Accionante: María Leonor Morales Cuellar  
Accionado: Banco Agrario de Colombia S.A.  
Fecha radicación: 21 de septiembre de 2021  
Fecha admisión: 22 de septiembre de 2021  
Fecha Notificación: 22 de septiembre de 2021  
Fecha sentencia: 4 octubre de 2021  
Fecha envió Corte Constitucional: 29 de marzo de 2022

De lo anterior, no queda duda que fueron desconocidos los términos procesales establecidos en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991 que establece:

*“ARTÍCULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.*

*Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.* (subrayado fuera del texto).

**ARTICULO 32.-**

*Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su (eventual)\* revisión.*

Respecto a la mora judicial la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha establecido lo siguiente:

*“Ahora bien, es necesario precisar que el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, establece que a los funcionarios judiciales les está prohibido «retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados».*

*En reciente sentencia de unificación, la Corte Constitucional definió la mora judicial como aquel «fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos». De ahí que, la mora judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales previstos en los códigos de procesales, los jueces omiten proferir las decisiones a su cargo».*

*Esta noción de mora judicial se estructuró basado en el concepto de plazo razonable esbozado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial del test empleado por dicha corporación según el cual, para determinar si se ha desconocido el plazo razonable a la hora de resolver un proceso judicial debe tenerse en cuenta: (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada. El análisis de estos aspectos debe hacerse teniendo en cuenta la duración total del proceso, esto es, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia, lo que ha sido denominado como análisis global del procedimiento por la Corte Europea de Derechos Humanos. Atendiendo a estos elementos que forman parte del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia, la Corte Constitucional señaló que la mora judicial puede ser justificada o injustificada. Así en la sentencia SU-179 de 2021 concluyó:*

*En conclusión, la Corte Constitucional, a través de sus diferentes salas de revisión, ha determinado que, de la interpretación armónica de la Constitución (arts. 29, 228 y 229) con lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 7 y 8), se deriva que uno de los elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso es la “garantía de obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”. En desarrollo de este postulado, la Corte ha explicado que la mora judicial, entendida como la omisión de los términos legales para que el juez profiera las decisiones a su cargo, ocurre por varias causas. Por un lado, el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias (mora judicial injustificada), y del otro, por la complejidad del asunto, la sobrecarga de trabajo y congestión judicial que afrontan los jueces de la República, la que en consecuencia produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen en los plazos estipulados por el Legislador (mora judicial justificada).”<sup>19</sup>  
(Sic a lo transcrito, incluidos errores e impresiones)*

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial frente a comportamientos eventualmente constitutivos de mora, atendiendo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia, ha acogido el concepto de “plazo razonable”, figura de construcción jurisprudencial, que busca identificar el tiempo que en cada caso en particular resulta necesario y suficiente para que el operador judicial tome las decisiones que en derecho

<sup>19</sup> Acta No. 048 del 30 de junio del año 2022, M.P. doctor JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA, radicado 11001010200020190147700

corresponda en garantía del derecho al acceso a la administración de justicia y de los derechos de las partes.

- **Mora judicial y plazo razonable**

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de abordar los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas que por ser integrantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hacen parte del bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución Política, ha resaltado que el concepto de “plazo razonable” no es de sencilla definición,<sup>20</sup> motivo por el cual, para superar esa dificultad, diseñó una serie de criterios para poder determinar, en cada caso, cual es la razonabilidad del plazo.*

*En efecto, la Corte IDH, en línea con lo expuesto por el Tribunal Europeo en los casos *Guincho vs. Portugal* y *Motta y Ruiz Mateos vs. España*, indicó que, la determinación de la razonabilidad del plazo dependía del análisis de los siguientes puntos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales<sup>21</sup> y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo<sup>22</sup>. Reiterando, que la razonabilidad de dicho lapso dependerá de las circunstancias de cada caso.<sup>23</sup>*

*Respecto a la definición y desarrollo de esos criterios al interior de la Corte IDH, considera necesario la Comisión tener en cuenta lo expuesto por la doctrina, que se ha puesto a la tarea de condensar los múltiples eventos en los que se enmarcan cada uno de esos puntos, así:<sup>24</sup>*

*Respecto a la actividad procesal del interesado, de acuerdo con la Corte, se deben evaluar los “comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna”, a fin de verificar si del expediente ante la Corte se desprende que las presuntas víctimas o sus familiares hayan entorpecido o demorado los procesos judiciales. Citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo en los Casos *Guichon vs. France*, *Stoidis vs. Greece* y *Glaser vs. the United Kingdom*, la Corte señaló que “[s]i la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable”. Así, la Corte ha evaluado, *inter alia*, si el interesado obstaculizó el proceso interno o si participó activamente haciendo todo lo posible para avanzar en la resolución del mismo; si hubo desinterés de su parte, o si se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación del país.*

*Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, se evalúan los comportamientos que por acción u omisión afectan la prolongación de la actuación judicial interna, en lo que concierne a las autoridades judiciales, así como todos aquellos procesos o procedimientos no judiciales que de alguna manera inciden en la causa y que pueden dejar entrever el comportamiento de las autoridades públicas. Así, por ejemplo, no se respeta el plazo razonable en caso de que una investigación haya sido abandonada sin llegar a la identificación y a la sanción de los responsables, ni cuando las*

<sup>20</sup> Corte IDH. Caso *Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77.

<sup>21</sup> Corte IDH. Caso *Genie Lacayo vs. Nicaragua*, op. cit., párr. 77, y Caso *Masacre de Santo Domingo vs. Colombia*, op. cit., párr. 164.

<sup>22</sup> Corte IDH. Caso *Valle Jaramillo y otros vs. Colombia*. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y Caso *Masacre de Santo Domingo vs. Colombia*, op. cit., párr. 164.

<sup>23</sup> Corte IDH, Caso *Favela Nova Brasilia vs. Brasil*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de febrero de 2017, Serie C No. 333, párr. 218. Corte IDH, Caso *González Medina vs. República Dominicana*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C No. 240, párr. 257. Caso *López Mendoza vs. Venezuela*, Fondo, reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Serie C, No. 233, párr. 162. Caso *Radilla Pacheco vs. México*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209, párr. 244.

<sup>24</sup> Convención Americana de Derechos Humanos Comentada, Juana María Ibáñez Rivas, editorial: Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, agosto de 2014, págs. 216 a 229, ISBN: 978-607-468-599-2.

autoridades no aceleran el proceso a su cargo y no tienen en cuenta los efectos que el tiempo tendría sobre los derechos de los implicados. En su análisis, el Tribunal ha valorado también la actuación de las autoridades del Estado en calidad de parte demandada en el proceso, con el fin de establecer si se les podrían atribuir las dilaciones. Asimismo, y vinculado al elemento anterior, el Tribunal ha señalado que “el juez interno, como autoridad competente para dirigir el proceso, tiene el deber de encauzarlo, de modo [...] que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios”.

En lo que concierne a la afectación generada por la duración del proceso en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, el Tribunal ha señalado que “[s]i el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”. Para ello, se deberá tomar en consideración, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. De esta manera, no se respetan las exigencias del plazo razonable cuando no se tienen en cuenta los derechos e intereses en juego en el proceso, o las afectaciones significativas, irreversibles e irremediables que el retraso en la decisión judicial puede generar en la situación jurídica y los derechos de las personas involucradas. A partir de ello, en el Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, que involucraba a un niño con discapacidad, el Tribunal consideró que “en casos de personas vulnerables, como lo es una persona con discapacidad, es imperante tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo la priorización en la atención y resolución del procedimiento por parte de las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos” y se eviten efectos negativos de carácter irreversible.(...)”

Con base en esos parámetros internacionales, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial frente a la “mora judicial” y sus implicaciones legales,<sup>25</sup> a partir del estudio de los deberes y derechos vulnerados a los administrados por los operadores judiciales, al no resolver oportunamente los trámites y procesos puestos a su consideración, (derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, consagrados en los artículos 29, 228 y 229 de la Carta Política y garantías judiciales, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica) y, en dicho desarrollo jurisprudencial ha fijado las reglas que deben tenerse en cuenta para definir si fue justificado o injustificado el retardo. Así, en sentencia SU 333 de 2020, señaló:

“4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior consideración, este Tribunal ha distinguido entre la **mora judicial justificada (producida por sobrecarga y congestión judicial)** y la **injustificada (causada por la arbitrariedad)**. (...)”

4.11. En la Sentencia T-230 de 2013, se explicó que para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería

<sup>25</sup> Consultar sentencias, T-431 de 1.992, T-190 de 1.995, T-030 de 2005, T-803 de 2012, T-230 de 2013, T-441 de 2015, T-186 de 2017, SU-394 de 2016, T-186 de 2017, SU-333 de 2020.

valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que se presenta una mora lesiva del ordenamiento cuando se está ante: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora. Se advirtió, además, que **(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso.** (...)

4.21. En el mismo sentido, se presenta una mora judicial injustificada, si: (i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.” (Negritas fuera de texto).

Así las cosas, para determinar si hay mora judicial injustificada debe verificarse, si se supera el plazo razonable y si no existen razones válidas que lo justifiquen; eventos que, en el presente asunto, para la Comisión se encuentran acreditados con las explicaciones vertidas por el doctor Mauricio Mogollón Pérez, Juez Juzgado Municipal Juzgado 001 Promiscuo Municipal Roncesvalles mediante oficio fechado el 18 de enero de 2024, en el que explicó:

#### **6.- Explicación respecto a la remisión tardía:**

*Como bien se puede evidenciar, los expedientes que dieron origen a la compulsas de copias datan del año 2021, año en el cual, se reitera, fungió el señor Urrego Ovalle como trabajador del juzgado Promiscuo Municipal de Roncesvalles.*

*Siendo importante expresar que el Señor Urrego Ovalle para la época de los hechos tenía 55 años de edad, contaba con mínima experiencia al interior de la rama judicial, lo que a la postre dificultó que cumpliera su deber de remitir los expedientes a la Corte Constitucional de manera oportuna. A lo que se suma, su dificultad para comunicar alguna falencia o problema en el trámite de envío de las acciones de tutela, que le hubiese permitido al secretario del juzgado de la época brindarle el apoyo adecuado y oportuno.*

*Es de agregar, además, que el cargo de citador solo requiere acreditación de título en educación media, luego el señor Urrego Ovalle no tenía conocimientos jurídicos en la materia ni dimensionó los contextos e implicaciones y algunas funciones, a pesar de las constantes orientaciones por parte del personal del juzgado.*

*Siendo de vital importancia hacer especial énfasis en que, con ocasión de los cambios que trajo la pandemia, específicamente, la modalidad de trabajo al interior de la rama judicial por la implementación de las tecnologías de la información le fue en extremo complejo al citador adaptarse a esta modalidad haciéndosele más difícil el manejo de las plataformas, programas y recursos tecnológicos utilizados, y en general las funciones.*

*Ahora en relación con las fechas como se evidencio anteriormente, el señor Urrego Ovalle laboró en este juzgado, inicialmente hasta el 29 de marzo de 2022, para luego ser nombrado nuevamente hasta el día 18 de abril de 2022, con ocasión del nombramiento y licencia de un empleado en propiedad que ingreso mediante concurso el día 31 de marzo de idéntica anualidad.*

*Y obsérvese como los expedientes aludidos fueron remitidos a revisión entre el 28 y 29 de marzo de 2022, es decir, los remitió el mismo día que dejó inicialmente su cargo. Así las cosas, es posible que el empleado estuviere acumulando expedientes para realizar*

*dicha actividad al momento de dejar el cargo, sin tener el suscrito o el secretario de la época conocimiento de la situación anómala.*

*Por otro lado, respecto a la carga laboral se debe indicar que no es particularmente alta para el cargo de citador grado 03, luego se considera como conclusión, que la remisión tardía se debe a un factor netamente humano por parte de dicho empleado, esto es, eventuales descuidos o represamientos personales que repercutieron en la mora al enviar los expedientes.*

*Ahora, cabe resaltar que desde que tomo el cargo el citador en propiedad (2 de mayo de 2022) y sus reemplazos, ante la concesión de una licencia no remunerada para ejercer otro cargo en la rama judicial, esta situación no se ha vuelto a presentar y ha sido llevada a cabo de manera oportuna y diligente por parte de los nuevos empleados del juzgado.<sup>26</sup>*

Exculpaciones que son de recibo para esta Sala, teniendo en cuenta además que, con la mora en la remisión de las acciones de tutela tantas veces referidas, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, no hubo afectación a los derechos fundamentales de los accionantes, ni para la administración de justicia puesto que las mismas fueron decidida dentro del término legal establecido, esto es, diez (10) días, las notificaciones se realizaron de manera diligente, en el término prudencial, no fue impugnada, tampoco fue seleccionada por la Corte Constitucional.

Ahora bien, no puede desconocer la Sala la congestión que actualmente viven todos los despachos de la Rama Judicial y las vicisitudes que debe afrontar a diario en el manejo de las plataformas virtuales para el trámite, manejo y alimentación de procesos, celebración de audiencias, remisión de expedientes y en general todos los trámites y actuaciones propias de la prestación del servicio de administración de justicia en todos los niveles, sin que esa situación pueda ser enrostrada a los empleados del despacho indagado como incumplimiento de las funciones propias de cada cargo, como tampoco se puede desconocer la situación especial que padecía el encargado de esa responsabilidad.

Por tanto, a pesar de haberse presentado una mora en el trámite reclamado por la Corte Constitucional, esta Sala la encuentra justificada en los parámetros en líneas arriba expuesto, por lo que no le queda más a la Sala que dar aplicación a las previsiones anotadas en los artículos 90 y 224 de la Ley 1952 de 2019, que señalan:

**ARTÍCULO 90. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO.** *En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, Así lo declarara y ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la que comunicada al quejoso.*

**ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO.** *En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el Artículo 90 y en el evento consagrado en el Artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.*

---

<sup>26</sup> Documento

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión de la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Tolima en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECRETAR LA TERMINACIÓN** de las diligencias disciplinarias adelantadas en averiguación de responsables contra los empleados y/o funcionarios del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Roncesvalles Tolima.

**SEGUNDO. NOTIFÍQUESE** a quienes haya lugar, advirtiendo que contra la presente decisión procede el recurso de apelación.

**TERCERO: EN FIRME** lo decidido, archívese el proceso

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CARLOS FERNANDO CORTÉS REYES**  
Magistrado

**ALBERTO VERGARA MOLANO**  
Magistrado

**JAIME SOTO OLIVERA**  
Secretario

**Firmado Por:**

**Carlos Fernando Cortes Reyes**  
**Magistrado**  
**Comisión Seccional**  
**De 002 Disciplina Judicial**  
**Ibague - Tolima**

**Alberto Vergara Molano**  
**Magistrado**  
**Consejo Seccional De La Judicatura**  
**Sala Jurisdiccional Disciplinaria**  
**Ibague - Tolima**

**Jaime Soto Olivera**  
**Secretaria Judicial**  
**Comisión Seccional**  
**De Disciplina Judicial**  
**Ibague - Tolima**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **855b3c535e2f6e61f713163b2ba1b8fad2ff56ebf7dd226969f0c7c6f097c480**

Documento generado en 13/03/2024 11:13:50 a. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**